

Santiago, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don José Alberto Allende Pérez de Arce, abogado, en representación de la sociedad TNT Express Chile Limitada, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 151 letra d) de la Ley Orgánica de Municipalidades, deduce reclamo de ilegalidad municipal en contra de la Municipalidad de Santiago, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°7702, de fecha 22 de septiembre de 2023, que puso término a la patente comercial definitiva N°768.760-5, otorgada a TNT para ejercer sus actividades comerciales en el local ubicado en calle Madrid N° 901, comuna de Santiago.

Hace presente que TNT es una sociedad relacionada de Federal Express Corporation, empresa internacional de transportes y mensajería con presencia en más de 200 países a lo largo del mundo. El principal objetivo de sus operaciones es entregar oportunamente los encargos de sus clientes, cuestión que ha realizado exitosamente a lo largo de todo Chile durante años.

Refiere que según el catálogo de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos, la actividad desempeñada por TNT consiste en el “Transporte de Carga por Carretera”, y que está codificada bajo el número 492300. Sobre la base de dicha actividad, la Municipalidad de Santiago le cobra a TNT una patente comercial por el local que la empresa mantiene en calle Madrid de dicha comuna, precisamente para captar y distribuir la carga que transporta. Al respecto, precisa que la Municipalidad, en todas las patentes que año a año le cobra, incluyendo ambos semestres del año 2023, señala como actividad la de “Oficina Administrativa Transporte de Carga”.

Agrega que distintos funcionarios de la Municipalidad de Santiago comenzaron a hostigar a su representada y a sus empleados del local de calle Madrid, por medio de distintas diligencias, tales como inspecciones sorpresivas, denuncias, citaciones y amenazas de clausura. Para sustentar su actuar, la Municipalidad acusó a su parte de funcionar sin contar con la patente comercial correspondiente, lo que no es efectivo puesto que sí cuenta con ésta, la que ha pagado en tiempo y forma.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBFVXNXXBJX

Sostiene que en la actualidad la Municipalidad le ha reprochado un supuesto ejercicio de una actividad comercial no contemplada en el giro de la empresa. Concretamente, la Municipalidad acusó a TNT que la actividad que la empresa tenía declarada era la de “Oficina Administrativa Transporte de Carga” siendo que la que realmente desempeñaba era la de “Servicio de encomiendas”, interponiendo denuncias ante los Juzgados de Policía Local de la comuna, hostigamiento que culminó con el término unilateral de la patente comercial mediante el acto impugnado por el presente reclamo.

Manifiesta que el 5 de octubre de 2023, TNT presentó un reclamo de ilegalidad en contra del Decreto Alcaldicio, con el objeto de que este fuera dejado sin efecto. A pesar de aquello, la Municipalidad de Santiago rechazó la referida reclamación al no emitir pronunciamiento alguno dentro del término legal que establece el artículo 151 letra c) de la Ley de Municipalidades, certificándose tal circunstancia por su Secretario Municipal, con fecha 31 de octubre de 2023.

En cuanto a los fundamentos del presente reclamo, denuncia la infracción al principio de legalidad o juridicidad que rige el actuar de la Administración. Al respecto, sostiene que la Alcaldesa ha ejercido una potestad que no tiene, puesto que si se revisa la normativa vigente en materia municipal, y particularmente aquella que dice relación con las patentes, no existe ningún pasaje que faculte a un alcalde a “dar por terminada” una patente comercial que ya fue emitida, cobrada y pagada, siendo la única excepción en materia de alcoholes, según se desprende del artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no resulta aplicable al presente caso. En consecuencia, argumenta que se le ha aplicado una sanción que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, lo que implica una grave infracción al principio de legalidad.

En segundo lugar, reclama que en la especie se ha llevado a cabo una invalidación encubierta, dejando sin efecto un acto administrativo que es válido y que se encuentra plenamente vigente. Precisa que el procedimiento y las formalidades para dejar sin efecto un acto administrativo se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley 19.880, sosteniendo que para que esa invalidación tenga lugar, no basta con que sea decretada de oficio por el



órgano de la administración respectivo, sino que debe cumplir con ciertos requisitos básicos, que son: (i) debe ser contrario a derecho; (ii) debe existir audiencia previa del interesado; y (iii) debe hacerse dentro del plazo de dos años. Añade que la Municipalidad sabía que no se cumplían tales requisitos, porque el actuar de TNT siempre ha estado amparado en la ley. De hecho, fue la misma Municipalidad la que validó ese actuar año a año, al emitirle la patente comercial sobre la base de la actividad económica desplegada por la reclamante.

Como tercera ilegalidad, alega que se incumple el deber de fundamentación de los actos administrativos, destacando que el actuar de su parte se ha ajustado siempre a la normativa vigente. Sobre este punto, refiere que si se revisa el acto impugnado, éste se limita a señalar que el inspector constató que su representada contaba con patente para el giro de oficinas administrativas, pero que, a pesar de ello, la actividad que desempeñaba era la de servicio de encomiendas. Es decir, a juicio de la Municipalidad, TNT estaría ejerciendo una actividad económica sin la correspondiente autorización. Manifiesta que la afirmación anterior no sólo es falsa, sino que, además, no cumple con el estándar de fundamentación de los actos administrativos que exige la ley. Destaca que resulta absurdo que la Municipalidad, luego de haber cobrado la misma patente por varios años, sobre la base de la misma actividad comercial desplegada por su parte, intempestivamente la declare terminada, sin siquiera entregar una razón coherente que explique su cambio de criterio.

En cuarto lugar, denuncia la infracción del derecho al debido proceso, y en particular, a ser oído, a tener una defensa jurídica, rendir prueba y a tener un procedimiento racional y justo.

Como quinta ilegalidad, reclama que la Municipalidad ha actuado en contravención a sus propios actos, infringiendo el principio de la confianza legítima que protege a TNT, que lleva décadas en el local de calle Madrid desplegando su actividad comercial.

En sexto lugar, alega la infracción de los artículos 23 y 24 de la Ley de Rentas Municipales, al prohibirle a TNT el ejercicio de su actividad comercial, pese a tener derecho a hacerlo y de que dicha empresa ya pagó la patente comercial.



Como séptima ilegalidad, denuncia la infracción del Decreto Supremo N° 187 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Al respecto, reitera que desde siempre, la actividad comercial que ha desempeñado TNT consiste en el “Transporte de Carga por Carretera”, indexado en el registro del Servicio de Impuestos Internos bajo el número 492300. Alega que por una razón que ignora, al momento de cobrarle la patente a TNT, la Municipalidad siempre ha señalado como actividad comercial la de “Oficina Administrativa Transporte de Carga”, manteniendo, eso sí, el número 492300 ya indicado. Sin embargo, recalca que desde hace un tiempo que la Municipalidad comenzó a reprocharle a su parte que dicho giro no coincidía con la actividad económica que efectivamente desplegaba, la cual correspondería a un “servicio de encomiendas”. Sin perjuicio de que lo que afirma la Municipalidad no es efectivo –puesto que en el local comercial de calle Madrid no se hacen encomiendas–, lo que destaca es el hecho de que la actividad económica “servicio de encomiendas” no está considerada en el listado de actividades económicas elaborado por el Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto es imposible que TNT pueda ejercerla y declararla. Hace presente que la “creación” de actividades económicas no está entregada al libre albedrío de las partes, ni a su sola discrecionalidad, tampoco a la de las municipalidades. Precisa que el listado de actividades económicas que maneja el Servicio de Impuestos Internos es el fruto de un proceso de elaboración serio y acucioso, elaborado en base al Decreto Supremo N° 187 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y a la Resolución Exenta N° 56, de 9 de julio de 2019, del mismo Servicio. Añade que las empresas Chilexpress S.A. y TNT poseen el mismo código de actividad económica, este es, el N° 492300, y a pesar de ello, las patentes de ambas empresas tienen una glosa de pago que es diferente. Hace presente que ninguna de esas glosas corresponde a la de “servicios de encomiendas”, que es el sustento que invocó la Municipalidad para decretar el término de la patente comercial de su parte. Agrega que a diferencia de otras empresas analizadas, DHL no ejerce su actividad bajo el código asignado al “transporte por carretera” (N° 492300), sino que lo hace bajo el código N° 512000, cuya actividad corresponde al “Transporte de carga por vía aérea”.



Ello, a pesar de desplegar una actividad comercial similar a la de su parte, y a la de las otras empresas analizadas.

Como octava ilegalidad, reclama la infracción del principio de la irretroactividad administrativa, consagrado en el artículo 52 de la Ley 19.880. al respecto, señala que dado que el acto impugnado produce efectos retroactivos –puesto que deja sin efecto otro acto administrativo anterior– las únicas dos alternativas de las que disponía la Municipalidad para obrar como lo hizo eran la invalidación y la revocación, siendo improcedente el primer mecanismo, como se indicó. En lo que respecta a la revocación, estima que tampoco procede, puesto que dicha facultad no podrá ejercerse cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, según lo establecido en el artículo 61 de la Ley 19.880.

Solicita que se acoja el reclamo, declarando que se anula el Decreto Alcaldicio N°7702, dictado con fecha 22 de septiembre de 2023, por la Ilustre Municipalidad de Santiago y que, en consecuencia, la patente otorgada a TNT respecto del local ubicado en la calle Madrid 901, comuna de Santiago, es válida y mantiene su vigencia, con costas.

Segundo: Que evacuando el traslado respectivo, Julia María Panéz Pérez, abogada, por la Municipalidad recurrida, solicita el rechazo del presente reclamo.

En primer lugar, sostiene que la sociedad TNT EXPRESS CHILE LIMITADA, contaba con la patente comercial N°768760-5, cuyo giro era “Oficina Administrativa, Transporte de carga” que data a partir del 18 de marzo del año 2003, que amparaba el establecimiento de comercio ubicado en calle Madrid N°901.

Luego, manifiesta que la Subdirección de Inspección mediante Memorándum N°1646 de 19 de agosto de 2023, informó que en visita inspectiva realizada al establecimiento comercial con fecha 8 de agosto del mismo año, se controló la propaganda que se ejerce sin permiso ni autorización municipal cursando denuncia N°4267822 a la Empresa Fedex Express Chile Spa Rut 76.754.296-8, la cual comparte domicilio comercial con la empresa TNT Express Chile Limitada, la que cuenta con patente N°768.760-5 con el giro de “Oficina administrativa Transporte de Carga” donde se constató que ejerce el giro no autorizado de Servicios de



Encomienda, por lo que se solicita la anulación de la patente al Departamento de Rentas y Finanzas, en atención a que el giro con el que debiese funcionar es del de “Servicios de Encomiendas”.

Refiere que a lo largo del año 2022 y 2023, se realizaron varias fiscalizaciones (17) y denuncias (6) todas ellas por funcionar sin patente ni autorización municipal, en conformidad a los artículos 23° y 26° del D. L. N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.

En virtud de los denuncios señalados, la Dirección de Rentas y Finanzas anuló la patente en el sistema informático municipal, conforme a lo indicado en el Decreto Secc. 2DA n°7702 de fecha 22 septiembre de 2023, que ordenó poner término a la patente definitiva enrolada a nombre de la empresa TNT Express Chile Limitada.

En dicho contexto, asevera que la reclamante sigue amparándose en una patente que le impide ejercer el giro de servicio de encomiendas, apreciando que la sociedad solo tiene como intención proteger su patente comercial sin regularizar la actividad comercial que realmente ejerce. De este modo, considerando que si bien el otorgamiento de una patente municipal habilita al respectivo contribuyente para ejercer una determinada actividad económica durante el período por el que ha sido autorizada, y que su vigencia depende de si se mantiene el cumplimiento de los requisitos que habilitaron su aprobación, resulta necesario revisar la situación de la renovación de las patentes municipales.

Al respecto, indica que según el inciso segundo del artículo 26 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, la municipalidad está obligada a otorgar la correspondiente patente en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos solicitados o la entidad edilicia hubiere verificado por otros medios su cumplimiento y en la medida, por cierto, de que se trate de una actividad lícita. Recalca que la renovación de una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento. Por tanto, sostiene que en ningún caso el Municipio llevó a cabo una “invalidación encubierta”, tan solo hizo uso de sus facultades de fiscalización y decretó el término de la patente definitiva.



En cuanto a las actividades que abarca funcionar con una “oficina administrativa”, la Subdirección de Rentas y Finanzas indica -Memorándum N°2079 del 07 de noviembre de 2023- que una oficina administrativa autoriza únicamente el desarrollo y actividad del área administrativa de una empresa, ejemplo de ello es un área contable, área de remuneraciones, área financiera, en donde se realizan tareas exclusivamente administrativas, de soporte y apoyo a la organización. En tanto que el giro de “Servicios de encomiendas” corresponde a realizar la recepción y envío de productos para luego trasladarlos a otros puntos de cobertura. Por tanto, al ser giros con destinos diferentes la Dirección de Obras municipales se encuentra facultada para emitir observaciones y/o modificaciones distintas de acuerdo al giro solicitado por el contribuyente, ello conforme lo precisa el artículo 26 del Decreto Ley 3.063. Por tanto, el giro de oficina administrativa no habilita a TNT Express para ejercer las labores de encomienda, aún cuando ello signifique solo “recibir y despachar carga”.

Por otra parte, precisa que la patente municipal N°768760-5 se encuentra enrolada a nombre de TNT Express Chile y no de Fedex Express Chile Spa; pese a ello, en las diversas fiscalizaciones que se realizaron por los inspectores municipales, se advierte que existe publicidad que corresponde a Fedex y no a TNT, por lo que los respectivos derechos municipales de propaganda no han sido pagados por el contribuyente en cuestión, lo que además reafirma que quien ejerce la actividad comercial es una empresa diferente a la autorizada por la entidad edilicia.

Atendido lo anterior, y considerando el historial de la sociedad reclamante de larga data de fiscalizaciones y denuncias por ejercer sin patente ni permiso municipal, es la Subdirección de Inspección, la que solicita poner término a la patente comercial, teniendo presente el imperativo de verificar la observancia de los requisitos que se dieron para su otorgamiento, y en este caso la sociedad reclamante no cumple al ejercer una actividad lucrativa diferente a la autorizada y haciendo uso de derechos de propaganda que corresponden a otra empresa y no a aquella enrolada con la patente N°768760-5.

Por otro lado, afirma que no se entiende como podría la sociedad



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBFVXNXXBJX

reclamante señalar en su petitorio, que se revoque el decreto Secc. 2da N°7702, emitido con fecha 22 de septiembre de 2023, por ilegal, abusivo y arbitrario, toda vez que el término de la patente fue decretado conforme a la normativa vigente, que cita.

Por todo lo expuesto, solicita que se declare sin lugar al reclamo de ilegalidad deducido, por carecer de todo fundamento fáctico y jurídico, pues el actuar de la I. Municipalidad de Santiago se ajusta a derecho, y las denuncias cursadas fueron realizadas por no cumplir con las condiciones y exigencias de los distintos cuerpos normativos señalados que regulan el ejercicio de actividades comerciales al amparo de un patente municipal, por lo que no ha existido ningún tipo de acción u omisión atribuible como ilegal.

Tercero: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 151 de la Ley 18.695, informa el Fiscal Judicial don Daniel Calvo Flores, quien en resumen es del parecer de desestimar el presente reclamo de ilegalidad.

En primer lugar, consigna que la patente comercial otorgada por la Municipalidad de Santiago a la empresa reclamante TNT EXPRESS CHILE LIMITADA, cuyo giro era “Oficina Administrativa, Transporte de carga”, la que detentaba desde el 18 de marzo del año 2003, para el establecimiento de comercio ubicado en calle Madrid N°901, fue anulada, conforme al Decreto Secc. 2DA N°7702 de fecha 22 septiembre de 2023, ordenando poner término a la patente definitiva enrolada a nombre de la empresa TNT Express Chile Limitada, tras la inspección que consta en Memorándum N°1646 de 19 de agosto de 2023, mediante la que se informó que el establecimiento comercial exhibe propaganda sin permiso ni autorización municipal, ejerciendo el giro no autorizado de Servicios de Encomienda, cursando denuncia N°4267822 –además de otras 6 denuncias cursadas entre los años 2022 y 2023-, a la Empresa Fedex Express Chile Spa Rut 76.754.296-8, la cual comparte domicilio comercial con la empresa TNT Express Chile Limitada.

De este modo y del mérito de los antecedentes que se encuentran en estudio, el señor Fiscal Judicial aprecia que la recurrente pretende mantener su patente comercial, sin regularizar la actividad que actualmente ejerce,



ello en concordancia a dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. En tal contexto, refiere que también la Contraloría General de la República se ha pronunciado estableciendo que la: “renovación de una patente comercial por un nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento”; por lo que en este caso, lo argumentado por la reclamante en cuanto a que la Municipalidad habría puesto fin a su patente de manera intempestiva y arbitraria, no sería efectivo, por cuanto del mérito de los antecedentes que han sido acompañados por la recurrida, se aprecia que ha existido una seguidilla de denuncias desde el año 2022, con el objeto que la recurrente regularice su giro y que éste sea coincidente con la patente comercial correspondiente.

Destaca que en cuanto al giro de la empresa reclamante, la Municipalidad expone, al evacuar sus descargos, que su Subdirección de Rentas y Finanzas ha indicado, mediante Memorándum N°2079 de 07 de noviembre de 2023, que en una oficina administrativa se autoriza únicamente, el desarrollo y actividades del área administrativa de una empresa, como son área contable, área de remuneraciones, área financiera, de soporte y apoyo a la organización; en tanto que el giro de “Servicios de encomiendas”, correspondiente en este caso a lo ejecutado por la recurrente, corresponde a realizar la recepción y envío de productos para luego trasladarlos a otros puntos de cobertura. En consecuencia, al ser giros con destinos diferentes, la Dirección de Obras Municipales se encuentra impedida de no habilitar a TNT Express para ejercer las labores de encomienda, aun cuando ello signifique solo “recibir y despachar carga”.

Además, recalca que la recurrida expone que fruto de las fiscalizaciones efectuadas al local donde se emplaza la recurrente, se ha constatado la existencia de publicidad que corresponde a la empresa Fedex y no a TNT, por lo que los respectivos derechos municipales de propaganda, lo que además no se encuentra autorizado por la autoridad edilicia, todo lo cual se encuentra, a juicio del señor Fiscal Judicial, dentro de las facultades de las que la Municipalidad se encuentra investida para ejercer, al amparo de la Ley N°18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades) y Decreto Ley N°3.063 (Rentas Municipales), normas que



se encuentran en armonía con el procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal, que dispone sobre el otorgamiento de los permisos de propaganda y tramitación de solicitudes, al cual debe someterse la reclamante a fin de regularizar su permiso y respectivo otorgamiento de patente comercial; por lo que, en consecuencia, el señor Fiscal Judicial no observa ilegalidad alguna en que la Municipalidad haya incurrido, en los términos alegados por la recurrente de autos.

Cuarto: Que el reclamo de autos, fundado en el artículo 151 de la Ley 18.695, es uno de ilegalidad y conforme al literal d) de dicha norma, resulta procedente en contra del rechazo del reclamo entablado ante el alcalde por un particular agraviado por cualquier resolución u omisión de funcionarios municipales que se estime ilegal, ya sea que tal decisión del edil se plasme en una resolución fundada o bien en caso de que no habiendo emitido éste pronunciamiento dentro del término de quince días, contado desde la fecha de la recepción del reclamo en la municipalidad, deba estimárselo rechazado, según dispone la letra c) de la citada disposición legal.

Quinto: Que el decreto alcaldicio que por esta vía se acusa de ilegal es del siguiente tenor:

“VISTOS: Antecedentes ID- 3995476, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N°19.880 de 2003, que establece Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Dictamen N° 5108, de fecha 26 de enero de 2012, de la Contraloría General de la República; Memorándum No 922 de fecha 6 de agosto de 2022, Subdirección de Inspección; Memorándum N° 2533 de fecha 16 de noviembre de 2022, Dirección de Asesoría Jurídica; Informe Inspectivo de fecha 8 de agosto de 2023, Subdirección de Inspección; Memorándum N° 1646 de fecha 19 de agosto de 2023, Subdirección de Inspección; y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vigente,

CONSIDERANDO

Que, la Subdirección de Inspección, mediante Memorándum No 1646 de fecha 19 de agosto de 2023, informa que visitado el establecimiento



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBFVXNXXBJX

de calle Madrid N° 901 con fecha 8 de agosto el Inspector, constató que la empresa cuenta con la patente N° 768.760-5, giro, Oficina Administrativa Transporte de Carga, ejerciendo además un giro no autorizado de "Servicios de Encomienda".

DECRETO:

1.- PÓNGASE TÉRMINO a la patente definitiva N°768.760-5, de giro, "Oficina Administrativa Transporte de Carga, enrolada a nombre de la empresa denominada TNT Express Chile Limitada, Rut N°88.192.900-7, con domicilio en calle Madrid N°901".

Sexto: Que al respecto, cabe señalar que la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se desprende de los artículos 8 de la Constitución Política de la República y 11 inciso 2° y 41 de la Ley 19.880, y se traduce en la valoración que realiza el órgano público de los antecedentes que son parte del proceso administrativo y que sirven luego de fundamento para la decisión y que hacen públicas las razones de hecho y derecho que sirvieron para adoptar una determinada decisión.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico, desde la reforma constitucional del año 2005, exige a todos los órganos estatales la fundamentación o motivación de sus actuaciones basado en el artículo 8° de la Carta Fundamental, que dispone como elemento de legitimidad de toda actuación estatal los fundamentos o motivaciones del acto, al señalar: "*Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen*".

Por su parte la Ley 19.880 que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado", en su artículo 11 estatuye:

"Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos."



El artículo 41, inciso 4º, de la citada ley dispone: *“Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados...; Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma proceda, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejecutar cualquier otro que estimen oportuno”*.

Séptimo: Que la exigencia de fundamentación deriva de la legalidad de las decisiones de los órganos del Estado, los cuales, al hacer ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República y la ley, deben justificar y expresar los motivos del acto; de modo que su decisión debe obedecer a ciertos motivos de hecho y derecho.

En tal sentido la Corte Suprema ha señalado: *“Que en este contexto resulta necesario precisar que la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”*. (CS Rol N°19585-2016).

Además, como parte de la legalidad del acto administrativo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado respecto de los elementos mínimos para asegurar la validez de la voluntad estatal: *“que siendo cinco los elementos del acto administrativo, esto es, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad del acto administrativo en relación a cualquiera de ellos”* (C.S. Rol N°1344-2011). Estos mismos elementos han sido reconocidos por la doctrina nacional mayoritaria, que ha señalado que todo acto estatal debe cumplir con los siguientes requisitos: a) la investidura regular y la competencia; b) el elemento de la forma; c) el fin y d) los fundamentos o motivos.



Octavo: Que así se han ido reconociendo diversos criterios jurisprudenciales en relación al elemento de la motivación, señalándose que: a) los actos administrativos deben ser debidamente fundados, no dejando dudas sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado; b) no basta la mera referencia a las normas, informes, técnicos o acuerdos, sino que éstos deben ser analizados pormenorizadamente, y c) el control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los invocados por la autoridad como a la calificación jurídica de los mismos.

En esta perspectiva la Corte Suprema, en autos Rol N° 19585-2016, señala: *“lo cierto es que las determinaciones que en este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado, como única finalidad que puede tener la actuación de la autoridad...; que la ausencia de una fundamentación adecuada no permite conocer las razones de interés público en base a las cuales se adopta la decisión (puede hacer presumir que el fin querido por la autoridad no es precisamente el de interés general o particular)...; En efecto, no basta la mera referencia que hace la autoridad en la cuestionada resolución en cuanto a haber considerado como fundamento para su decisión lo que aconsejan o expresan los informes técnicos evacuados durante el proceso de tramitación de la solicitud de la recurrente, sin mayor análisis y explicitación de los parámetros o criterios utilizados”*.

La misma Corte Suprema en sentencia dictada en autos rol N°27467-2014, ha precisado que la motivación del acto administrativo exige *“contener los fundamentos en que se sustenta con el fin de legitimar la decisión de la autoridad, razones que no pueden ser meramente formales, toda vez que caerían dentro de la categoría de arbitrarios y, por lo tanto, ilegales. Es por ello que, si el acto aparece desmotivado o con razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto, se debe concluir que el acto carece de uno de sus elementos esenciales”*

Noveno: Que conforme a lo señalado se concluye que el deber de motivación que recae sobre los órganos públicos en la realización de los



actos administrativos que dicten no se satisface con la mera mención de los antecedentes presentados, sino que requiere de la justificación de la decisión de la Administración. Además, la motivación del acto administrativo no sólo tiene relevancia para su validez, sino que también por el efecto que tiene sobre el administrado y la configuración del Estado de Derecho, al concretar la legalidad de los órganos del Estado en sus funciones de forma pública y garantizando que la decisión de la Administración no es arbitraria.

Décimo: Que del examen del acto recurrido, se concluye que el mismo se sustenta en una mera enunciación de elementos descriptivos, como un informe de la Subdirección de Inspección y Memorandum que indica, sin que la autoridad administrativa municipal, efectúe un análisis razonado de éstos y de su mérito, que explique y de cuenta de su idoneidad para justificar la decisión adoptada por la autoridad edilicia. Tampoco consigna la normativa correspondiente a la tipificación de la infracción que efectúa.

En este contexto la decisión de poner término a la patente de la recurrente aparece desprovista de una real motivación, al no explicitar razonadamente cuáles son los factores que han sido considerados por la autoridad, ni la normativa aplicada; no pudiendo ser considerados los elementos que menciona tal acto como suficiente fundamentación, atendido el carácter genérico y precario de los mismos.

Lo anterior, ha dejado al administrado desprovisto de la información necesaria, con datos precisos y comprobables acerca de lo que consideró la autoridad para poner término a la patente municipal que ha detentado desde largo tiempo, lo que ha afectado el ejercicio fundado de su derecho a que tal decisión sea revisada por la autoridad municipal y judicial, a través de los mecanismos recursivos que le franquea la ley, lo que da cuenta también de una falta al debido proceso.

Undécimo: Que esta Corte disiente de lo informado por el señor Fiscal Judicial en cuanto considera que el actuar de la autoridad sectorial se ajustó a la legalidad vigente, pues tal conclusión se funda en una supuesta infracción relativa a las normas de publicidad por la recurrente, sin embargo, tales hechos no fueron materia de la inspección municipal, ni del cargo que se le formuló al administrado.



Duodécimo: Que conforme a lo razonado se concluye la ilegalidad y arbitrariedad por la falta de fundamentación antes analizada, del acto reclamado, lo que lleva a acoger el recurso de impetrado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 151 y siguientes de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se declara que se **acoge, sin costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por don Roberto Ramos Herrera en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y en su lugar se declara que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 7702, de 22 de septiembre de 2023, pronunciado por la I. Municipalidad de Santiago, y en consecuencia, la patente otorgada a TNT respecto del local ubicado en calle Madrid 901, comuna de Santiago, mantiene su vigencia.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Carolina Brengi Zunino.

Rol N° 707-2023 Contencioso Administrativo.

No firma la Ministra señora Villadangos, por encontrarse en comisión de servicio, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Itma. Corte de Apelaciones de Santiago,** presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Renée Rivero Hurtado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBFVXNXXBJX

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi Z. y Abogado Integrante Renee Rivero H. Santiago, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBFVXNXXBJX